



UPDATES PHILIPPINES

Publicación del Frente Democrático Nacional de Filipinas

Amsterdamsesstraatweg 50, 3513AG Utrecht, Los Países Bajos
T: : +31 30 2310431 | E: updates.philippines@ndfp.org | W: updates.ndfp.org

2020 Numero 11

Edición Español

1 de octubre 2020

EDITORIAL Déjà vu... pero no del todo

En unos días, el 21 de septiembre, el pueblo filipino celebrará el 48º aniversario de la imposición de la ley marcial por parte de Ferdinand Marcos. Pero volvemos a ver los días oscuros de Marcos bajo el actual presidente Rodrigo Duterte. Déjà vu.

Como Marcos, la sed de poder de Duterte es insaciable. Duterte escupe y pisotea los derechos de las personas. Por orden suya, agentes estatales armados se involucran en asesinatos desenfrenados y violencia contra los pobres y contra cualquiera que se ponga de pie y luche por el pueblo. En cuatro años, Duterte ha superado a Marcos en términos de asesinatos en masa.

Como su héroe Marcos, el hambre de riqueza de Duterte es voraz. Él está en connivencia con China en préstamos sobrevalorados y con altos intereses para proyectos de desarrollo a fin de obtener ganancias. Mima a los grandes narcotraficantes cuyas mercancías provienen principalmente de China continental. Ha saqueado el tesoro público de su propio gobierno al amparo del Covid-19.

Emulando a Marcos, Duterte se encuentra ahora en una ola de préstamos extranjeros de enormes sumas que las futuras generaciones filipinas deberán pagar.

Pero Duterte no está a la altura de Marcos en muchos aspectos. Parece haber disgustado a sus amos estadounidenses más rápido que el viejo dictador. Pasaron cerca de dos décadas, desde 1966 hasta el asesinato de Benigno Aquino en 1983, cuando los imperialistas estadounidenses comenzaron a tener dudas sobre la utilidad de Marcos para ellos.

Ahora, Estados Unidos, en solo cuatro años, está ofendido por la sumisión de Duterte a China, especialmente en la cuestión de la agresividad de China en el Mar de China Meridional y el Mar de Filipinas Occidental. Estados Unidos tampoco está satisfecho con la capacidad de Duterte para derrotar al movimiento armado revolucionario.

Duterte apacigua débilmente a su amo mayor retirando sucesivamente la notificación de terminación del Acuerdo de Fuerzas Visitantes y dejando que sus subordinados expresen el boicot a las compañías chinas involucradas en la construcción de estructuras ilegales en las islas, atolones y bajíos en disputa en el Mar de Filipinas Occidental. Ha otorgado el perdón total a un infante de marina estadounidense condenado por matar a un transgénero filipino y ahora afirma la validez de la decisión del Arbitraje Permanente de la CONVEMAR que desacredita el reclamo territorial chino de 9 líneas en el Mar de China Meridional.

Pero la mayor diferencia entre la era de Marcos y la actual es la extensión y profundidad mucho mayor de la resistencia actual al régimen fascista de Duterte, compuesto por el movimiento democrático amplio y el movimiento revolucionario.

Solo por citar un ejemplo, el Nuevo Ejército Popular ahora tiene miles de combatientes rojos operando en 110 frentes guerrilleros en 73 de las 81 provincias del país, aumentados por decenas de miles de milicias populares y cientos de miles en las unidades de autodefensa de los poblados revolucionarios.

¿ Déjà Vu? No exactamente. **UP**



El NDFP hace un llamamiento a 46 Estados miembros del CDH de la ONU para que aprueben el informe sobre Filipinas

El Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP), como movimiento de liberación nacional que representa al pueblo filipino en su lucha por la justicia, la liberación nacional y social, y por una paz justa y duradera, hizo un firme llamamiento a principios de septiembre de 2020 a 46 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

[continúa página siguiente...]

[... continuación]

El NDFP solicitó a los miembros del CDH que votasen SÍ al informe publicado en junio de 2020 por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Filipinas. El poderoso informe, que obtuvo el voto mayoritario de SÍ por parte del CDH en junio de 2020, exigía una investigación independiente de las numerosas violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen filipino del Presidente Rodrigo Duterte.

El informe de junio de 2020 realizado por Su Excelencia Michelle Bachelet se someterá a una nueva votación durante las sesiones del CDH que se celebrarán del 14 de septiembre al 6 de octubre de 2020. Los 47 Estados miembros del CDH, incluidos 14 nuevos miembros y los 33 miembros titulares, deben votar sobre esta Resolución aprobada en junio de 2020.

Firmando en nombre del movimiento de liberación nacional del pueblo filipino estaba el Sr. Luis G. Jalandoni, Principal Representante Internacional del NDFP y Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del NDFP. Jalandoni es también el Asesor Senior del Grupo de Negociación del NDFP que participa en las negociaciones de paz con el Gobierno de la República de Filipinas (GRP).

Al hacer un llamamiento a los 46 gobiernos, Jalandoni afirmó que “el clamor de las familias de numerosas víctimas de violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen actual ha llegado a un punto de ebullición”. El brutal asesinato de la activista por los derechos humanos Zara Álvarez, de 39 años, madre de una hija de 11 años, el pasado 17 de agosto y la tortura y el asesinato del líder campesino Randall Echanis, de 72 años, consultor de paz del NDFP el pasado 10 de agosto, han provocado protestas nacionales e internacionales”.

También citó el informe de prensa del 30 de agosto en el que 500 defensores de los derechos humanos en Filipinas y en el extranjero hicieron un llamamiento para que se pusiera fin a los asesinatos de activistas.

El llamamiento del NDFP a los gobiernos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas excluyó al Gobierno de la República de Filipinas bajo la presidencia de Duterte. **UP**



Las familias de las víctimas piden justicia a gritos. Foto: kodao | bulatlat.com

500 defensores de los derechos humanos piden el fin de los asesinatos de activistas

500 defensores de los derechos humanos en Filipinas y en el extranjero pidieron al gobierno de Duterte que pusiera fin a la “marca roja” y a los asesinatos de activistas y críticos del gobierno. La declaración colectiva se emitió con motivo del Día Nacional de los Héroes del País, el 30 de agosto de 2020. En ella se afirmaba que los asesinatos del dirigente campesino Randall Echanis, la trabajadora de derechos humanos Zara Álvarez y el coordinador regional de Bayan Muna, Jory Porquia, ponían de manifiesto el creciente número de ejecuciones extrajudiciales de activistas, disidentes políticos y

miembros de la oposición bajo el gobierno del Presidente Rodrigo Duterte.

Echanis, Álvarez y Porquia fueron tildados de comunistas y “enemigos del Estado” por funcionarios del gobierno antes de ser asesinados. En la declaración se pedía una investigación imparcial e independiente de esos asesinatos, así como de otras víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

La declaración fue firmada por legisladores, líderes religiosos, académicos, artistas, defensores del medio ambiente, personalidades de los medios de comunicación social y activistas sociales. En ella se pedía al Presidente Duterte que “dejara de incitar a la policía, al ejército e incluso a los civiles ordinarios a cometer esos horribles actos”.

Entre los firmantes de la declaración se encuentran los obispos católicos Broderick Pabillo y Gerardo Alminaza, la monja benedictina Mary John Mananzan del Movimiento contra la Tiranía, Armin Luistro de los Hermanos de La Salle, el ex Presidente del Tribunal Supremo Ma. Lourdes Sereno, y los senadores de la oposición Francis Pangilinan, Leila de Lima y Risa Hontiveros. Los miembros de la oposición de la Cámara de Representantes estaban encabezados por el Líder de la Minoría Bienvenido Abante, el Líder de la Minoría Adjunto Carlos Zárata, el representante de Albay Edcel Lagman y el representante de Quezon City José Christopher Belmonte.

Firmaron la declaración más de 100 abogados filipinos, incluidos los miembros de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo, el Grupo de Asistencia Jurídica Gratuita y los Abogados Preocupados por las Libertades Civiles, así como más de 50 organizaciones de abogados y juristas de todo el mundo.

[continúa página siguiente...]

[... continuación]

Cerca de un centenar de académicos y educadores de diferentes ámbitos también apoyaron el llamamiento, así como sindicatos y grupos de activistas de todo el espectro político.

La Policía Nacional de Filipinas admitió que 6.000 presuntos consumidores y traficantes de drogas han muerto en operaciones policiales. Otras estimaciones elevan esa cifra a 27.000. Los grupos de derechos humanos han informado de más de 300 asesinatos políticos de activistas o presuntos comunistas o simpatizantes comunistas en los últimos años.

La recientemente firmada Ley Antiterrorista abre el camino para más ataques contra los disidentes políticos. **UP**



Los pueblos de Samar combaten el COVID-19 en medio de una intensa militarización

Diecisiete pueblos revolucionarios de la isla de Samar, en el centro de Filipinas, están combatiendo, con éxito, la propagación del COVID-19. Los brazos locales del Communist Party of the Philippines, las unidades del New People's Army (NPA) y las organizaciones de masas revolucionarias han trabajado codo a codo para establecer protocolos sanitarios, preparar instalaciones para el período de cuarentena e implementar medidas de precaución con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad entre la población.

A pesar de que las Fuerzas Armadas Filipinas (AFP) han intensificado los ataques armados, las unidades de la NPA están siendo capaces de llevar a cabo la campaña sanitaria en 17 poblaciones, proporcionando educación vital sobre el COVID-19, su propagación y cómo prevenirla.

En junio del 2020, se empezaron a llevar a cabo capacitaciones básicas médicas para los comités de salud local. Las y los médicos recién formados pudieron poner en marcha, masivamente, clínicas en sus áreas. En un frente guerrillero, los comités sanitarios pudieron ofrecer servicios médicos y dentales gratuitos a al menos 400 residentes de cuatro pueblos.

Los combatientes rojos usan mascarillas y siguen los protocolos sanitarios y de distanciamiento social al interactuar con la población local. Las unidades de la NPA usan hierbas medicinales y acupuntura. Con el fin de abordar la escasez de alimentos y medicamentos, los combatientes rojos han estado impulsando la producción de cultivos alimenticios, así como el de cosechas que pueden ser utilizadas como hierbas medicinales.

Mientras tanto, los soldados de la 8ª División de Infantería del AFP están impidiendo que los habitantes de dos ciudades de Samar cosechen sus cultivos para coaccionarlos a "rendirse" a los militares. En San José de Buan, al menos 39 familias han admitido ser miembros de la NPA y se han rendido o, en caso contrario no podrían atender sus granjas y cosechar sus cultivos. Por miedo, 60 familias ya han huido de sus comunidades. **UP**

Una unidad del NPA en marcha. Foto de archivo.

